JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C. Octubre diez de dos mil veintidós.

Ref. Acción de tutela No. 1100131030272022-000384-00 de ALEXANDER MORENO RODRIGUEZ como Representante Legal de INTEGRAL DE MONTACARGAS SAS contra JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL

Procede el Despacho a decidir la presente acción de tutela con el siguiente estudio:

ANTECEDENTES :

LA ACCION Y EL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO

El señor **ALEXANDER MORENO RODRIGUEZ** como **Representante Legal de INTEGRAL DE MONTACARGAS SAS** acude a esta judicatura, para que le sea tutelado el derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado por la parte demandada.

La tutela se fundamenta en hechos que se sintetizan, así: que El día 17 de septiembre de 2020, se instauró demanda civil ejecutiva de mínima cuantía de Integral de Montacargas S.A.S. en contra de OVERHAUL SERVICE S.A.S. la que le correspondió por reparto al Juzgado 25 Civil Municipal De Bogotá., bajo el numero 110014003025202000560 00.

Dice que dentro del proceso se admitió demanda, se decretaron medidas cautelares y se notificó en debida forma al demandado, quien no contestó demanda, por lo que, se solicitó seguir adelante con la ejecución. Como consecuencia de las medidas cautelares solicitadas, el despacho retuvo unos dineros consignados por parte de la Empresa A.D.N LOGISTICA a favor de la sociedad demanda OVERHAUL SERVICE S.A.S.

Que La empresa A.D.N LOGISTICA, realizó solicitud al despacho para el reintegro de los dineros, argumentando que estos se habían consignado por error a la cuenta bancaria de la sociedad demandada, de esta solicitud se corrió traslado a la parte demandante, y procedió a radicar respuesta a través de su apoderado.

Dice que el proceso ingresó al despacho el día 28 de febrero de 2022, es decir, desde hace más de seis meses, sin que hasta la fecha se haya resuelto sobre las solicitudes elevadas frente a los dineros

consignados a favor de la sociedad demandada. Posteriormente, el día 04 de agosto de 2022, se radicó ante el despacho petición de información e impulso procesal a través del correo del Juzgado y a la fecha, habiendo transcurrido más de un mes desde su radicación, no se ha obtenido respuesta a la petición, pues, en la página de la Rama Judicial no aparece actuación alguna frente a la solicitud elevada, y por parte del despacho no se ha dado ninguna manifestación.

Indica que el proceso se encuentra al despacho desde hace más de seis meses, lo anterior, resulta preocupante, pues al día de hoy no se tiene conocimiento del estado actual del proceso, ni se han hecho efectivas las pretensiones de la demanda y las medidas cautelares, situación que afecta gravemente sus intereses como parte demandante y constituye una mora judicial injustificada por parte del aquí accionado - Juzgado 25 Civil Municipal De Bogotá que incluso en ocasiones anteriores se ha tenido que recurrir a la acción de tutela para obtener información del proceso.

Dice que se ha cumplido el termino establecido para que el despacho accionado responda a su petición, el cual es de 10 días que se ha superado el plazo razonable para dar respuesta a la petición elevada, se desconoce algún motivo valido para dicha omisión y el proceso lleva al despacho más de seis meses sin una razón justificada, por lo que considera vulnerado el derecho de petición.

Solicita que a través de este mecanismo se Se ordene al Juzgado 25 Civil Municipal De Bogotá, dar respuesta a la petición elevada el 04 de agosto de 2022, respecto de la solicitud de información e impulso procesal. Igualmente, informe los motivos por los cuales el proceso lleva más de seis meses al despacho.

TRAMITE PROCESAL

Por auto de octubre 4 de 2022 se admitió la acción de tutela requiriendo a la parte accionada para que en el término de dos días se pronunciaran sobre los hechos y circunstancias que motivaron la acción constitucional.

CONTESTACION DE LA PARTE ACCIONADA

JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL

Manifiesta que a través de la Oficina de Reparto, el 16 de septiembre de 2020 se recibió demanda ejecutiva de Integral de Montacargas SAS en contra de Overhaul Services SAS, la cual fue radicada con el No 11001-40-03-025-2020- 00560 00.

Señala que mediante auto fechado el 13 de febrero de 2021, se libró mandamiento de pago parcial y se libraron medidas cautelares. Que Posteriormente, mediante auto del 12 de abril de 2021, se adicionó y complementó el mandamiento de pago; corrigiendo, igualmente, el decreto de las medidas cautelares.

Dice que Puesto a disposición de las partes el trámite de integración del contradictorio, ingresó al despacho para resolver la solicitud de una sociedad ajena al proceso.

Que mediante auto del 7 de febrero de 2022, se resolvieron las solicitudes allegadas, ordenando oficiar al tercero ajeno a la litis con el fin de que allegara la constancia de la consignación del título, se aceptó la notificación personal, corrió el término legal de defensa y se aceptó la sustitución de poder.

Indica que cumplido el requerimiento formulado y atendiendo el estado del proceso, en sendas providencia de 6 de octubre de 2022 dispuso: (i) Seguir adelante la ejecución; (ii) denegar la solicitud de reintegro de dineros formulada por el tercero ADN Logística S.A.S., en tanto los activos allí situados se presumen de propiedad de la demandada y un cuestionamiento o controversia sobre dicha titularidad, debe darse en el escenario sustancial-bancario o judicial autónomo y plenario que le sea propio; (iii) informar los únicos dineros existentes en el plenario; (iv) requerir a Bancolombia S.A. para que informe sobre el acatamiento de la medida; y (v) Precisar que no es posible realizar la entrega de dineros en razón a que no se cumplen con los condicionamientos del art. 447 del Código General del Proceso.

Refiere que para el caso objeto de reproche del accionante, se ha procedido a emitir las providencias de impulso como son seguir adelante la ejecución conforme lo dispone el art. 440 del Código General del Proceso e igualmente proveer sobre lo atinente respecto al reintegro de dineros solicitado por el tercero ajeno a la litis y demás disposiciones concordantes. Así las cosas, en aras de reducir el impacto de la congestión judicial, para el expediente objeto de la acción de tutela, se procederá a notificar por estado a las partes, la providencia que adelanta el impulso del proceso.

En la respuesta se indican ampliamente las razones por las cuales el expediente no había surtido el trámite requerido.

CONSIDERACIONES:

De la Acción:

Respecto de la acción ejercida por el perjudicado el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia consagra que: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Competencia y Procedencia:

Es competente este Juzgado con fundamento en el Decreto 1382 de 2000.

Del caso Concreto:

Concurre a esta judicatura el señor ALEXANDER MORENO RODRIGUEZ como representante legal de INTEGRAL DE MONTACARGAS SAS para que por el Juzgado accionado se le de impusso al proceso referido y se de respuesta a la petición elevada.

Procedencia de la acción de tutela

Legitimación activa

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Así mismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 contempla la posibilidad de agenciar derechos ajenos cuando "*el titular de los mismos no está en condiciones de promover su propia defensa*". En la misma norma, se establece que la legitimación por activa para presentar la tutela se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción; (ii) por medio de representantes (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; y (iv) utilizando la figura jurídica de la agencia oficiosa.

En el presente caso se encuentra acreditado el requisito de legitimación por activa toda vez que la tutela la presenta el señor **ALEXANDER MORENO RODRIGUEZ como Representante Legal de INTEGRAL DE MONTACARGAS SAS.**

Legitimación por pasiva

La legitimación por pasiva en la acción de tutela se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales. En este caso la parte accionada es el Juzgado 25 Civil Municipal de esta ciudad.

Inmediatez

Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de presentar la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de sus derechos fundamentales, cumpliéndose en este caso dicho requisito.

Subsidiariedad

Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en que sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

Teniendo en cuenta los derechos que indica el accionante como vulnerados y con respecto al Derecho de petición, “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución...”

Este derecho no implica que la resolución a darse sea favorable a lo solicitado, la obligación que le asiste a la Administración es dar una pronta resolución, para ello el legislador ha establecido unos términos en los cuales debe darse respuesta, y en el caso de resolver un derecho de petición el término solo es de quince días.

La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.

Debe tenerse en cuenta que el derecho de petición procede en las actuaciones administrativas, mas no contra actuaciones judiciales, pues la jurisdicción ordinaria desarrolla su actividad con fundamento en el derecho de acción y no de petición. Al respecto la honorable Corte Constitucional en sentencia T-311/13 ha puntualizado: “El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los

actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”

De los hechos narrados en la petición de tutela, la respuesta dada por el Juzgado accionado, el amparo solicitado no tiene prosperidad, por cuanto ya se profirió auto de octubre 6 del presente año, mediante el cual se resolvió lo solicitado por el accionante y como precisamente el objetivo de la tutela, era que se diera el impulso procesal respectivo por consiguiente ha de negarse esta acción constitucional, por carencia total de objeto.

Como se dijo y se repite ahora, el objeto esencial de la acción de tutela es garantizar la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales, amparo en el cual el juez, una vez analizado el caso particular, proferirá fallo en procura de la defensa de los derechos vulnerados; pero si la situación fáctica que generó la amenaza o vulneración ha sido superada, la decisión que dicte no tiene ninguna resonancia frente a la posible acción u omisión del acusado.

Por tanto, debe tenerse en cuenta que lo pedido en tutela, ya se resolvió por el Juzgado accionado, cesando así la vulneración al derecho invocado.

La Corte Constitucional a este respecto ha dicho:

“...la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”. (Corte Constitucional, Sentencia T-519 16 Septiembre de 1992. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

Como se cumplió por el accionado lo pretendido por el accionante, es por lo que éste Juzgado, atendiendo los elementos de

hecho que concurren en el presente caso no se accede a la protección impetrada por darse la situación de hecho superado.

Por tanto, no hay lugar a conceder la tutela.

Por lo expuesto, el Juzgado veintisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE :

1.- **NEGAR** el amparo constitucional al derecho de petición impetrado por **ALEXANDER MORENO RODRIGUEZ como Representante Legal de INTEGRAL DE MONTACARGAS SAS** contra **JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL**, por darse la situación de hecho superado.

2.- Notifíquesele a las partes el presente fallo por el medio más expedito.

3.- Remítase el expediente, a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Juez,

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS.

Firmado Por:
María Eugenia Fajardo Casallas
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 027 Escritural
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a034e5e2b2bc03099baf88d47bd20cd30e2816d5e7c55fb631f696bf72e6251**

Documento generado en 10/10/2022 09:26:13 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>